

130-19.64

**INFORME FINAL
DENUNCIA CIUDADANA DC-89-2021**

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

**CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
Cali, febrero de 2022**

HOJA DE PRESENTACIÓN

CONTRALORA DEPARTAMENTAL

LIGIA STELLA CHAVES ORTÍZ

DIRECTOR OPERATIVO DE
CONTROL FISCAL

JUAN PABLO GARZON PÉREZ

AUDITOR

ROBINSON SUAREZ BARCO

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	4
2. LABORES REALIZADAS	5
3. CONCLUSIONES.....	7
4. HALLAZGOS.....	8

1. INTRODUCCIÓN

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, dentro de su Plan Estratégico, ha incentivado la participación Ciudadana de veedores y de comunidad en general, con el fin de que se ejerza un control social participativo y se coadyuve con la vigilancia de los recursos del Valle del Cauca.

Por otro lado, la Dirección Operativa de Control Fiscal de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, en uso de las facultades establecidas en la Ordenanza 122 de agosto 14 de 2001, modificada por la Ordenanza N°500 del 07 de diciembre de 2018, Manual de Funciones y de Requisitos de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, y en virtud a lo establecido en el artículo 1 y 17 de la Ley 1755 de 2015, procede a emitir el presente informe, el cual contiene los resultados obtenidos en desarrollo de la atención a la denuncia Ciudadana CACCI 3633 del 11 de octubre de 2021 DC-89-2021, en la que se informó:

“A través del presente me permito solicitar la intervención inmediata de la Contraloría Departamental del Valle, con el fin de que se investigue la conducta irregular, ocasionada con la contratación celebrada en la vigencia 2021, con la universidad encargada de surtir el examen para los aspirantes al cargo de Contralor Departamental periodo 2022-2025.

Hago la presente denuncia al considerar que durante la vigencia 2016 al 2019 y 2020 al 2021, dicho contrato o convenio fue celebrado con la universidad del Valle, la cual lo realizaba de manera gratuita, sin embargo de manera extraña, malgastando los recursos públicos, realizan una cuantiosa contratación con una entidad foránea y de dudosa reputación, es de resaltar que durante el proceso de inscripción se han generado varios cambio en el listado de admitidos lo cual incrementa el manto de duda.

Para su mayor ilustración ruego solicitar los expedientes contractuales de las contrataciones celebradas para la elección del contralor de los periodos 2016 al 2019 y 2020 al 2021 y la celebrada en la vigencia 2021, con lo cual se demuestra de manera tajante el detrimento patrimonial en que incurren los miembros de la Asamblea Departamental del Valle.”

De acuerdo a lo narrado nos pronunciaremos sobre los temas relacionados con el alcance y competencia del Control Fiscal ejercido por éste Ente de control el cual está delimitado por la Constitución y Leyes que regulan la materia, en las que se indica que dicha función pública de vigilancia a la gestión fiscal sobre las entidades públicas y los particulares o entidades que manejen fondos o bienes del Estado en todos los órdenes y niveles, se ejerce en forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y principios establecidos por el artículo 267 de la Constitución Política Colombiana y los artículos 4-5 del Decreto Ley 403 2020, teniendo en cuenta que el control concomitante y preventivo tiene carácter excepcional, y su coordinación corresponde exclusivamente al Contralor General de la República en materias específicas

2. LABORES REALIZADAS

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, en virtud de lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 1757 de 2015, con el fin de determinar la competencia, hechos y demás circunstancias propias de las denuncias ciudadanas sujetas de revisión de este Ente de Control, realizó visita fiscal el día 13 de octubre de 2021 y solicitó a la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, lo siguiente:

1. Contratos suscritos con el objeto de elegir al Contralor(a) Departamental del Valle del Cauca para las vigencias 2016-2019, 2020-2021 y 2022-2025.
2. Soportes de pago de los contratos relacionados en el punto 1

Se analizó cada hecho denunciado confrontado con la revisión de la documentación suministrada por el sujeto de control conforme al hecho denunciado así:

“A través del presente me permito solicitar la intervención inmediata de la Contraloría Departamental del Valle, con el fin de que se investigue la conducta irregular, ocasionada con la contratación celebrada en la vigencia 2021, con la universidad encargada de surtir el examen para los aspirantes al cargo de Contralor Departamental periodo 2022-2025.

Hago la presente denuncia al considerar que durante la vigencia 2016 al 2019 y 2020 al 2021, dicho contrato o convenio fue celebrado con la universidad del Valle, la cual lo realizaba de manera gratuita, sin embargo de manera extraña, malgastando los recursos públicos, realizan una cuantiosa contratación con una entidad foránea y de dudosa reputación, es de resaltar que durante el proceso de inscripción se han generado varios cambio en el listado de admitidos lo cual incrementa el manto de duda.

Para su mayor ilustración ruego solicitar los expedientes contractuales de las contracciones celebradas para la elección del contralor de los periodos 2016 al 2019 y 2020 al 2021 y la celebrada en la vigencia 2021, con lo cual se demuestra de manera tajante el detrimento patrimonial en que incurren los miembros de la Asamblea Departamental del Valle”.

Lo analizado en el presente informe, será lo relacionado con los hechos denunciados, por lo que se verifica en orden cronológico los hechos que dieron origen a las presuntas irregularidades.

El 3 de diciembre de 2015, entre la Asamblea Departamental del Valle del Cauca y la Universidad del Valle, suscribieron convenio interadministrativo de cooperación para el acompañamiento técnico en la elección del Contralor Departamental del Valle del Cauca para la vigencia 2016-2019, de carácter gratuito, en razón a la normatividad que regía en su momento, esto es, la Ley 330 de 1992 y el artículo 272 de la Constitución Política de Colombia, modificado por el artículo 23 del acto legislativo 02 de 2015.

Seguidamente, el 22 de noviembre de 2019, entre la Asamblea Departamental del Valle del Cauca y la Universidad del Valle, suscribieron contrato interadministrativo 01-2019, con el fin de prestar servicios de asesoría, apoyo y acompañamiento para adelantar las

etapas de la convocatoria contenida en la resolución No. 143 de 2019, así como la presentación de terna de candidatos a Contralor Departamental para el período de 2020-2021, por valor de quince millones de pesos (\$15.000.000 M/Cte).

Para la vigencia 2022-2025, la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, a través de la Resolución 134 del 30 de agosto de 2021 convocó a universidades o instituciones de educación superior públicas o privadas con acreditación de alta calidad, propuesta que fue acogida sólo por una universidad que para este caso solo fue la Universidad de Cartagena, pese a haber invitado de manera directa a 6 universidades enviando solicitud vía correo electrónico.

Posteriormente la Asamblea revisó la documentación aportada por la Universidad de Cartagena, quien allegó la única propuesta, verificando los requisitos plasmados en la convocatoria, los cuales cumplen a cabalidad, suscribiendo de esta forma, contrato interadministrativo, tal y como quedo determinado en la Resolución No. 134 del 30 de agosto de 2021

De acuerdo a los hechos denunciados, es importante aclarar que para la vigencia 2022-2025, la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, cumplió con lo establecido en el artículo 272 de la Constitución Política de Colombia, el cual fue modificado por el Acto Legislativo No. 4 de 2019 que, respecto a la elección de los contralores territoriales, señala:

“ARTÍCULO 272. (...)

Los Contralores departamentales, distritales y municipales serán elegidos por las Asambleas Departamentales, Concejos Municipales y Distritales, de terna conformada por quienes obtengan los mayores puntajes en convocatoria pública conforme a la ley, siguiendo los principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana y equidad de género, para un periodo de cuatro años que no podrá coincidir con el periodo del correspondiente gobernador y alcalde. (...)”

Adicionalmente, el Artículo 6° del Acto Legislativo 04 de 2019, indica que *“la Contraloría General de la República desarrollará los términos generales para el proceso de convocatoria pública de selección de los contralores departamentales, municipales y distritales.”*

Respecto a lo anterior, la Contraloría General de la República, emitió la Resolución 728 del 18 de noviembre de 2019, estableciendo los siguientes parámetros:

“ARTÍCULO 14. EFICIENCIA DEL GASTO. Para garantizar la financiación y la eficiencia en el gasto, las asambleas departamentales y los concejos municipales podrán asociarse para contratar una sola institución de educación superior, pública o privada, con acreditación de alta calidad, para que adelante las etapas de la convocatoria correspondiente, en concordancia con el Artículo 5 de la Ley 1904 de 2018.”

Así las cosas, los requisitos normativos para la convocatoria que conlleve a las pruebas a realizar a los aspirantes al cargo de Contralor Departamental, vigencia 2022-2025, están estipulados en el artículo 272 de la Constitución Política de Colombia, artículo 6° del Acto Legislativo 04 de 2019, Ley 1904 de 2018 y Resolución 728 del 18 de noviembre de 2019.

Con relación a la financiación de la contratación suscrita en razón al proceso de elección de Contralor Departamental, el artículo 5 de la Ley 1904 de 2018 y la Resolución 728 del 18 de noviembre de 2019, establecieron que para garantizar la financiación y la eficiencia en el gasto, las asambleas departamentales y los concejos municipales podrán asociarse para contratar una sola institución de educación superior, pública o privada, con acreditación de alta calidad, para que adelante las etapas de la convocatoria correspondiente.

3. CONCLUSIONES

1. Los hechos denunciados hacen alusión a los valores contratados y pagados por la Asamblea Departamental del valle del Cauca, en razón a las presuntas irregularidades en la contratación de la institución universitaria que realizara las pruebas de conocimiento, una de las etapas de selección del cargo de Contralor Departamental del Valle del Cauca, sin embargo, en la vigencia 2022-2025, la convocatoria y contratación suscrita, cumplieron con lo estipulado en el artículo 272 de la Constitución Política de Colombia, artículo 6° del Acto Legislativo 04 de 2019, Ley 1904 de 2018 y Resolución 728 del 18 de noviembre de 2019.
2. Basados en directrices dadas por la Función Pública y la normatividad que aplica para tales efectos, para llevar a cabo la elección del cargo de Contralor Departamental del Valle del Cauca, sólo se podrá hacer con universidades o instituciones de educación superior públicas o privadas con acreditación de alta calidad, como lo pudo acreditar en su momento la Universidad de Cartagena.
3. La Universidad de Cartagena es una institución la cual cuenta con acreditación institucional de alta calidad de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución del Ministerio de Educación Nacional No. 01968 del 12 de febrero de 2018 y Acreditación por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil, como institución idónea para adelantar los concursos o procesos de selección de ingreso y ascenso a los empleos públicos de carrera administrativa, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. CNSC – 201481000129105 del 18 de septiembre de 2018, con Certificación Icontec ISO 9001-2015 con Registro de Número: CO-SC-CER153470.

Es importante que el denunciante tenga presente que el Daño Patrimonial tiene ciertas características establecidas en el Decreto 403 de 2020 Artículo 126 que modificó el Artículo 6 de la Ley 610 de 2000:

"ARTÍCULO 6º. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los órganos de control fiscal. Dicho daño podrá ocasionarse como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan

gestión fiscal o de servidores públicos o particulares que participen, concurren, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción del mismo.”

En consecuencia, los presuntos daños patrimoniales relacionados en su petición no fueron evidenciados en el análisis de los hechos denunciados.

Igualmente, de acuerdo a lo esgrimido por el Honorable Consejo de Estado en Sentencia con radicado N° 68001-23-31-000-2010-00706-01 del dieciséis (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017), la Consejera Ponente MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ, ha expresado:

“(…)

RESPONSABILIDAD FISCAL - Daño patrimonial Es indispensable que se tenga una certeza absoluta con respecto a la existencia del daño patrimonial, por lo tanto es necesario que la lesión patrimonial se haya ocasionado realmente, esto es, que se trate de un daño existente, específico y objetivamente verificable, determinado o determinable y ha manifestado en diferentes oportunidades que la responsabilidad fiscal tiene una finalidad meramente resarcitoria y, por lo tanto, es independiente y autónoma, distinta de la responsabilidad penal o disciplinaria (Subrayado fuera del texto original) *que pueda corresponder por la misma conducta, pues lo que en el proceso de responsabilidad fiscal se discute es el daño patrimonial que se causa a los dineros públicos, por conductas dolosas o culposas atribuibles a un servidor público o persona que maneje dichos dineros, lo que significa que el daño patrimonial debe ser por lo menos cuantificable en el momento en que se declare responsable fiscalmente a una persona. En el presente caso, no existe duda, ni siquiera por parte de la actora de que en efecto hubo un daño patrimonial al Estado [...]. (...)*”

Así las cosas, no se observaron irregularidades de índole fiscal, de acuerdo a las consideraciones expuestas.

4. HALLAZGOS

CUADRO DE HALLAZGOS

CUADRO DE RESUMEN DE HALLAZGOS DENUNCIA DC-89-2021						
No. HALLAZGOS	Administrativos	Disciplinarios	Penales	Fiscales	Sancionatorios	Presunto Daño Patrimonial (\$)
0	0	0	0	0	0	0